

Universidad Militar Nueva Granada
Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad



**La extorsión y su incidencia en el desarrollo económico de Colombia en un escenario de
posconflicto**

Castro Torres, Henario

Director
Dr. Cipriano Peña

Especialización en Administración de la Seguridad

Ensayo Académico

Bogotá, Colombia
2016

La extorsión y su incidencia en el desarrollo económico de Colombia en un escenario de posconflicto

Castro Torres Henario

Resumen

El documento presenta un estudio sobre la incidencia que tiene la extorsión y el chantaje de que son víctimas las empresas formalmente constituidas, sin importar su tamaño ni la actividad a la que estén dedicadas, como también lo son las personas sin importar su posición económica al igual que medianos y pequeños negociantes. Este delito afecta gravemente la economía del país. Este ensayo basa sus apreciaciones en fuentes documentales idóneas que son confiables, por las investigaciones que han realizado sobre el tema y los datos presentados por el Ministerio de Defensa Nacional y otras entidades oficiales y privadas. Se considera que la extorsión y el chantaje afectan gravemente la economía del país, al provocar cierres de empresas, fuga de capitales y otras consecuencias conexas. Estos delitos son ejecutados principalmente por los grupos subversivos, Bandas Criminales organizadas y delincuencia común, aspectos estos que son expuestos con toda claridad en este ensayo.

Palabras clave: Extorsión, chantaje, incidencia, economía, grupos subversivos.

Summary

The paper presents a study on the impact it has extortion and blackmail victims formally established companies, regardless of size or activity to which they are dedicated, as are individuals and small and medium businessmen. This crime seriously affecting the country's economy. This essay based its findings on best documentary sources that are reliable, for they have done research on the subject and the data presented by the Ministry of National Defense and other government and private entities. It is considered that extortion and blackmail seriously affect the country's economy by causing closures, capital flight and other related consequences. These crimes are mainly executed by subversive groups, organized criminal gangs and common criminals, those aspects which are clearly posted in this trial.

Keywords: Extortion, blackmail, incidence, economy, subversive groups.

La extorsión y su incidencia en el desarrollo económico de Colombia en un escenario de posconflicto

Incidencia de la extorsión en la economía de Colombia

Si bien toda la sociedad es consciente de que la extorsión y el chantaje son algunas de las formas más comunes de la criminalidad en Colombia, las informaciones al respecto se encuentran dispersas, lo que no permite apreciar el problema en toda su magnitud.

Por consiguiente este documento se ha propuesto, con base en la recopilación de fuentes idóneas, exponer cómo la extorsión incide gravemente en la economía del país. Según noticias periodísticas, la extorsión es práctica común en las grandes ciudades, en Barranquilla: Periódico *El Herald*o, (2015, mayo 27); Cali: Periódico *El País*, (2015, enero 22); Medellín: Periódico *El Colombiano* (2015, mayo 27); Bogotá: *El Tiempo* (2015, abril 14), por citar solo algunos ejemplos de lo que estos diarios informan y las diferentes modalidades del delito de extorsión que se practican.

Existe gran expectativa a nivel nacional, por los cambios que se avecinan en el posconflicto por cuanto éste dará un nuevo rumbo al país en todos los órdenes: social, político, económico y militar. De lograrse el acuerdo de Paz, quedará atrás un pasado que durante largas décadas causó estragos en el país tanto en términos de vidas humanas como sociales y económicas, frenando así su desarrollo, a pesar de las medidas que varios gobiernos tomaron para contrarrestar los efectos adversos por la situación de orden público e inseguridad reinante en el país.

Sin embargo, hay que señalar que aun cuando se firme el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC), y posiblemente con el Ejército de Liberación Nacional (en adelante ELN) en un futuro cercano, esto no obsta para que grupos criminales sigan proliferando. Aún más, es posible que crezcan los ya existentes con los reductos de estas guerrillas que no deseen reincorporarse a la vida civil y acostumbradas como están a delinquir, la inseguridad en el país seguirá seriamente afectada.

Entre los delitos que más han incidido en el aspecto económico ha sido la extorsión, delito del que han sido víctima no solamente las grandes empresas, petroleras, por ejemplo, sino que

éste afecta a pequeños y medianos comerciantes al menudeo, sectores ganaderos, amas de casa; en fin, la extorsión tiene un muy amplio rango de posibles víctimas para lograr el enriquecimiento ilícito penalizado en el artículo 244 de la Ley 599/2000, Código Penal Colombiano (en adelante CP).

Expuesto a grandes rasgos este problema, el cual se delimita al delito de extorsión y las secuelas que esto trae para el desarrollo del país, surge un cuestionamiento: ¿De qué manera la extorsión incidirá en el desarrollo económico de Colombia en un escenario de posconflicto?

Por todo lo anterior, esta investigación tiene como su objetivo principal: Analizar la incidencia que puede tener la extorsión en el desarrollo económico de Colombia en el escenario del posconflicto.

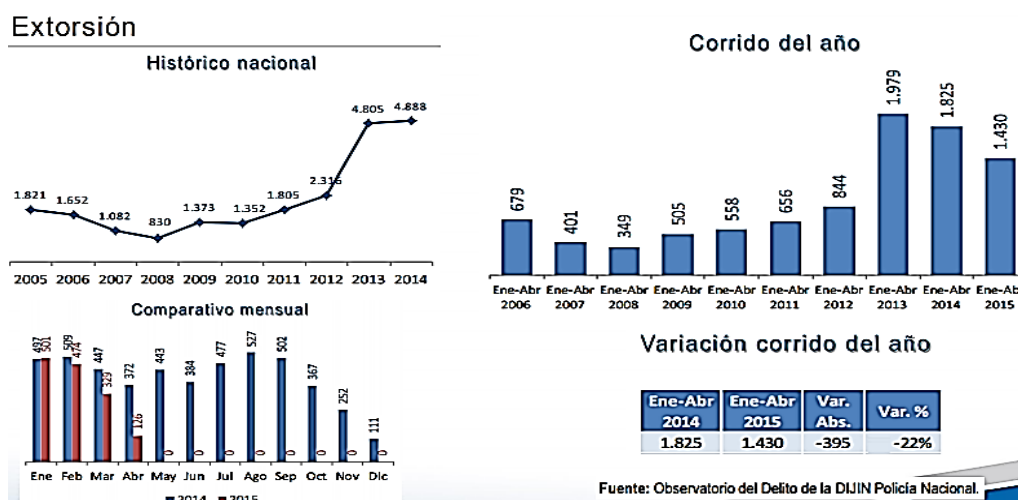
Las razones que justifican la elaboración de este documento es la inquietud de que esta modalidad criminal -la extorsión-, se incremente teniendo en cuenta que una vez firmada la paz, centenares de hombres y mujeres, pertenecientes a esas organizaciones, prefieran seguir delinquir en lugar de reintegrarse a la sociedad.

Si se examina de cerca solamente uno de los muchos delitos criminales que han sido una práctica constante de las FARC, del ELN, y otros grupos subversivos, es conocido que uno de estos es la extorsión.

La extorsión ha llevado a empresas al cierre definitivo de sus operaciones en Colombia.

Atlas Seguridad, et., al (2015), presenta la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Situación Extorsión en Colombia, Enero – Abril 30/ 2015



Fuente: Grupo Atlas Seguridad, et., al, 2015, p. 2.

Esta gráfica demuestra que hasta el mes Abril del año 2015, este delito ha dejado en la ruina a quienes legalmente han establecido sus negocios, o han trabajado durante muchos años y formado un capital para su sostenimiento y el de los suyos. También el chantaje y extorsión a menores de edad, que caen fácilmente en la red de los criminales, el secuestro y posterior extorsión a la familia de la víctima. Las modalidades son múltiples y cada vez son más ingeniosas y letales en términos económicos y aún en vidas humanas.

Según explica el Grupo Atlas Seguridad (2015):

El modus operandi son generalmente llamadas a celulares o fijos (50 %), cobro directo (24 %), mixto las dos anteriores (19%), mensajes de texto y correo electrónico (3,4 %), y cartas 3%.

En el 83 % de los casos fueron de autoría de la delincuencia común, el 9 % a las FARC, el 6 % a las bandas criminales, el 2 % al ELN.

Los comerciantes son el blanco más predilecto de estos grupos delincuenciales, no obstante, los empleados son el segundo grupo más afectado por esta modalidad delictiva.

Según los datos oficiales del Guala de la Policía Nacional, mientras se recibían 307 denuncias por parte de comerciantes en el primer trimestre del año, 193 empleados en general de diferentes empresas también señalaron estar siendo extorsionados.

Dentro del tercer grupo de los sectores más afectados se encuentran los profesionales. En ésta categorización, se tiene en cuenta la vocación económica de cada región: gran cantidad de docentes son víctimas de extorsión en Córdoba, en Arauca, el objetivo de los delincuentes son los ingenieros y en Antioquia, los profesionales de la salud (Atlas Seguridad, 2015, p.3).

Es decir, se valen de cualquier medio y el delito prácticamente está extendido en todo el territorio nacional.

Escudriñando en la historia, el delito de extorsión se manifiesta en Colombia desde que el país entró en las largas décadas de conflicto armado en un vórtice de violencia, donde se conjugaron todos los delitos desde el más simple hasta aquellos más atroces, porque como lo

asegura un documento publicado hace algunos años por las Naciones Unidas (en adelante UN) y el Departamento Nacional de Planeación (en adelante DNP):

El país enfrenta serios problemas de congestión en los diferentes eslabones del subsistema de justicia penal, producto de una legislación que tipifica un rango excesivamente amplio de conductas y que acude demasiado a las penas privativas de libertad, como también de los altos índices de criminalidad severa o de los técnicamente llamados *mala in se*¹.

Precisamente porque no damos abasto con este tipo de delitos y ni siquiera los “crímenes atroces” que define el derecho internacional (NU & DNP, 2003, p.172).

No es el propósito de este trabajo entrar a cuestionar el Sistema Penal de Colombia, pero lo afirmado anteriormente por estas entidades tiene un trasfondo de verdad, puesto que entre otros graves delitos, como los de lesa humanidad, se encuentra la extorsión y muchas veces unido al secuestro extorsivo, que sobrepasa la acción de la justicia.

Estas reflexiones, se ven confirmadas por el documento de la Fundación Ideas para la Paz (en adelante FIP) y de la Asociación Nacional de Empresarios Industriales (en adelante ANDI), (2012), entidades que describen y analizan la extorsión en Colombia, sustentando el fenómeno con un importante número de fuentes. Estas entidades definen el delito de extorsión en los siguientes términos:

Es el constreñimiento que se hace a una persona con el fin de hacer, tolerar u omitir alguna cosa para obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero. Es un delito que afecta la libertad tanto como la propiedad y la integridad física. Se debe considerar como una de las múltiples formas de coaccionar la libertad individual. Tiende a presentar permanencia en el tiempo y puede adoptar formas esporádicas, intermitentes o continuas (FIP & ANDI, 2012, p. 6).

Más adelante agregan:

En los últimos años, la extorsión en Colombia se ha convertido en una práctica recurrente que se ha extendido en el país y se ha transformado de acuerdo a la evolución del conflicto

¹ Malos por sí mismos

armado y los intereses de las guerrillas, Bandas Criminales (en adelante BACRIM) y delincuencia organizada. A diferencia de otros delitos, afecta a todos los sectores de la sociedad. No obstante, históricamente algunos sectores se han visto más afectados que otros, por ejemplo, dentro del sector empresarias los más afectados suelen ser los comerciantes, y asociaciones gremiales, entre otros” (FIP & ANDI, 2012, p. 10).

La extorsión está relacionada directamente con el comportamiento y la dinámica de la criminalidad en Colombia. Recientemente este delito, se ha venido trasformando debido al accionar de los actores ilegales, considerando que los cambios en las dinámicas del conflicto y la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno, han transformado las formas de operación y financiación delincriminal influyendo directamente en la expansión, desarrollo y evolución de este delito. Anteriormente, la extorsión tenía como principales víctimas a grandes compañías y empresarios, e implicaba grandes sumas de dinero. En la actualidad este tipo de práctica victimiza a gran parte de los sectores de la sociedad e implica cuantías menores (FIP & ANDI, 2012).

Esta transformación se puede explicar, gracias a que los cambios en las estrategias de los actores armados han obligado a la diversificación del negocio y a la urbanización del delito.

Evolución del fenómeno de la extorsión

La evolución en el fenómeno de la extorsión ha estado influenciada por los siguientes hechos:

1. La violencia en el país ha creado espacios, con poca presencia institucional, que facilitan cometer delitos como la extorsión, permitiendo que los grupos armados al margen de la ley y la delincuencia común vea en la extorsión una forma eficiente de obtener recursos y con ellos su financiación.
2. La reducción radical de los recursos proporcionados por el secuestro y el narcotráfico, debido al incremento de las acciones en contra de estos delitos por parte de la Fuerza Pública.
3. Los grupos guerrilleros, las bandas criminales y la delincuencia organizada, han intentado compensar la reducción de los recursos provenientes del narcotráfico y el secuestro con un incremento en la extorsión.

4. Los grupos ilegales han optado por diversificar sus fuentes de financiación y la extorsión representa un método que les permite avanzar en la apropiación de recursos (Echandía, 2006).

5. El delito de la extorsión es cada vez más complejo. En él, los actores involucrados, los medios que utilizan y los fines que buscan, son cada vez más difíciles de identificar.

Además la extorsión, es una actividad criminal eficaz con costos logísticos y de visibilidad, inferiores al secuestro, lo que facilita que los diferentes actores tengan la posibilidad de cometer el delito sin tener consecuencias (FIP & ANDI, 2012).

De acuerdo con lo expuesto, se puede decir que el fenómeno de la extorsión se ha convertido en una de las fuentes de financiación más importantes para los grupos armados junto con la minería ilegal, y el narcotráfico.

Siguiendo con el documento de FIP & ANDI (2012), éste describe:

La extorsión no ligada al conflicto armado.

“Se presenta operativamente como un delito de fácil práctica y esto hace que el abanico de extorsionistas se inicie con un delincuente sin mayores recursos operativos y termine con miembros de bandas estructuradas delincuenciales, que utilizan la extorsión para conseguir recursos y en muchos casos para intimidar y someter a la población en las zonas donde operan” (Llano e Ibarra, 2011)

En casos donde se presenta este tipo de extorsión, se puede decir que con una oportuna denuncia ante las autoridades competentes, hay mayores oportunidades de solucionar este caso y en última instancia arrestar a los delincuentes (FIP & ANDI, 2012, p. 14).

Como ya se mencionó, esta clase de extorsiones es cometida principalmente por delincuentes comunes, bandas delincuenciales y por delincuentes recluidos en la cárceles (quienes constituyen otra modalidad de extorsión). La delincuencia común es el actor que presenta el mayor número de extorsiones denunciadas a las autoridades. Específicamente trabaja en zonas urbanas y en las principales ciudades del país. En algunos casos se ha encontrado que las bandas criminales utilizan a estos grupos para el cobro de extorsiones en las ciudades, como es el caso de los llamados “Combos” en Medellín, donde estos se encargan de cobrar extorsiones para las Bandas Criminales (BACRIM). (Llano e Ibarra, 2011).

La delincuencia común utiliza dos modalidades: el “pago único”, donde la extorsión no es continúa sino en un momento determinado (lo que no quiere decir que la extorsión pare definitivamente) y pago continuado o vacuna. La delincuencia común hace exigencias de cuantías no muy grandes, que según las autoridades pueden llegar hasta 5 millones.

Continuando con el documento de la Fundación Ideas para la Paz y la Asociación Nacional de Empresarios Industriales (2012) en una entrevista realizada por esta entidad a funcionarios del Grupo Antisecuestro y Extorsión (en adelante GAULA), señalaron que estos delincuentes utilizan de igual forma la llamada micro-extorsión. Se identifican como integrantes de las guerrillas o las Bandas Criminales (BACRIM), como forma de generar miedo y presión hacia las víctimas. Adicionalmente, esta clase de extorsionadores generalmente piden que el pago se realice a través de una consignación o la entrega a una persona.

En lo que respecta a la extorsión en las ciudades, la Fundación Seguridad y Democracia (s.f.), señala que: “Con el fin de lograr una lectura más completa del panorama de la seguridad en Colombia, ha decidido dedicar una parte de su informe de Coyuntura de la Seguridad al seguimiento y análisis de la inseguridad en las principales urbes del país” [...]. (p. 1).

El “Índice de la seguridad urbana” ordena de mayor a menor la gravedad de inseguridad teniendo en cuenta las tasas de modalidades delictivas que afectan la vida, la libertad y el patrimonio de los colombianos en las ciudades con más de 200.000 habitantes. Se trata de 27 ciudades, las cuales representan el 50% del total de la población nacional. El panorama estadístico para las seis ciudades más grandes de Colombia, establece un formato para la lectura de los datos estadísticos de los delitos de mayor relevancia en los contextos urbanos, tales como: hurtos a personas, hurtos en residencias, hurtos a establecimientos comerciales, hurtos de automotores, hurtos a entidades bancarias, homicidios, secuestro y extorsión. Para su análisis se tienen en cuenta su variación histórica con relación a diferentes períodos, sus tasas, su participación porcentual (Fundación Seguridad y Democracia, s.f., p.1).

De los datos presentados por esta entidad, solamente se tendrá en cuenta el delito de extorsión, aclarando que estos datos corresponden al año 2005. Pero como se ha visto anteriormente, el Grupo Atlas Seguridad, et., al, (2015), presenta datos más recientes. La

razón para incluir estos datos de la Fundación Seguridad y Democracia es con el fin de obtener la trazabilidad del delito de extorsión, publicados, y posteriormente hacer un análisis comparativo entre los datos tanto de estas dos entidades y los presentados por el Ministerio de Defensa Nacional, aclarando que los datos de la Fundación únicamente se refieren a la extorsión en las grandes ciudades de Colombia:

Tabla 1. Número de casos y tasa por 100.000 habitantes

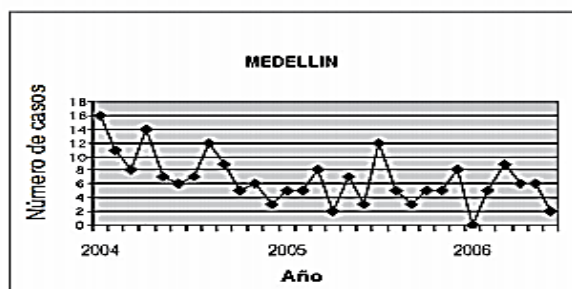
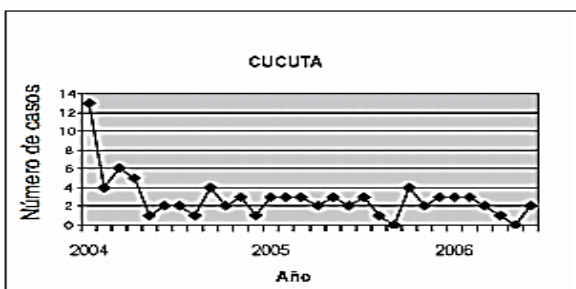
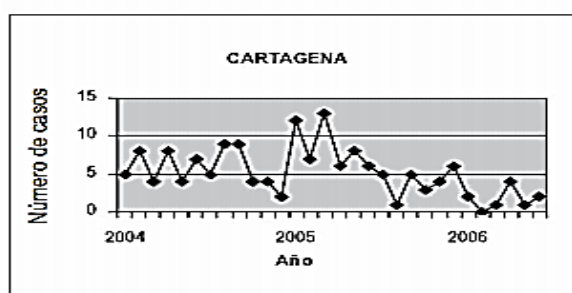
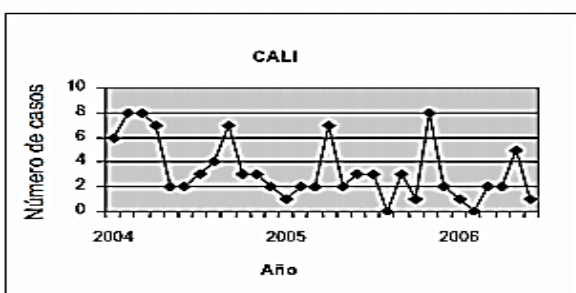
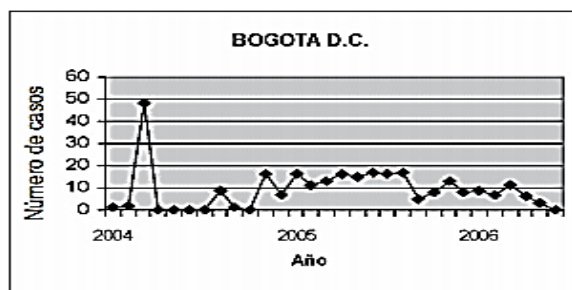
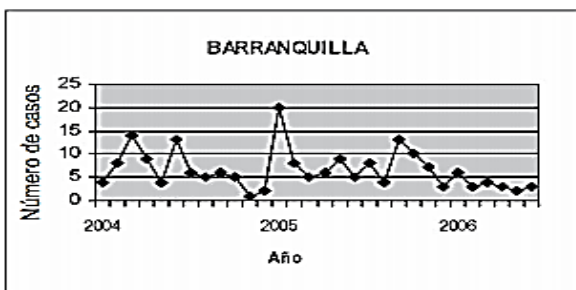
	Número de casos						Total Semestre	Tasa x 100.000 hab.
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		
Barranquilla	6	3	4	3	2	3	21	3.09
Cúcuta	3	3	2	1	0	2	11	3.05
Medellín	0	5	9	6	6	2	28	2.70
Cartagena	2	0	1	4	1	2	10	1.99
Bogotá	9	7	11	6	3	0	36	1.02
Cali	1	0	2	2	5	1	11	0.93

Fuente: Fundación Seguridad y Democracia, p. 62.

Tabla 2. Variación del delito de extorsión en las principales ciudades 2004-2005

	Total primer semestre			Total Semestre	Variación 2005-2006
	2004	2005	2006		
Barranquilla	52	53	21	-59.62	-60.38
Bogotá	51	88	36	-29.41	-59.09
Cali	33	17	11	-66.67	-35.29
Cartagena	36	52	10	-72.22	-80.77
Cúcuta	31	16	11	-64.52	-31.25

Medellín	62	30	28	-54.84	-6.67
Total 6 ciudades	265	256	117	-55-85	-54.30



Fuente: Fundación Seguridad y Democracia (s.f., p. 63).

Así mismo, los ya citados (Llano e Ibarra, 2011), aseguran que:

Dentro de esta categoría se encuentra otra forma de extorsión, que es la extorsión desde las cárceles. Ésta, como su nombre lo indica, proviene de los centros penitenciarios y la realizan los reclusos de diferentes penales del país. Esta modalidad de extorsión ha cobrado fuerza en los últimos años llegando a aumentar en un 40%. Estas son organizaciones criminales que cuentan con miembros fuera de las cárceles, quienes son los encargados del cobro de las extorsiones. Hacen las extorsiones por medio de llamadas desde teléfonos celulares, haciéndose pasar por integrantes de algún grupo armado ilegal. En estos casos se busca una negociación y pago

rápido, que en su mayoría se exigen pequeñas cuantías y se solicita que los pagos se hagan por medio de consignaciones en cuentas bancarias o envíos por empresas de giros.

La extorsión ligada a las dinámicas del conflicto armado

Este tipo de extorsión se presenta como un delito que ha generado un silencioso e indiscriminado crecimiento en todos los departamentos con clara influencia de estos grupos ilegales, que lo manejan como un tributo o impuesto de guerra. Por su incremento en los últimos años, el gobierno ha identificado que el fenómeno de la extorsión es un elemento que hay que atacar de inmediato, por lo cual, dentro de la política para defender el derecho a la libertad personal, este delito ha sido un elemento fundamental para atacar las fuentes de financiación de los grupos armados. (Llano, e Ibarra, 2010).

Históricamente, el sector empresarial ha sido objeto constante de este delito afectando tanto a sus empleados como a sus operaciones en diferentes zonas del país, debido a su estatus como actores económicos y eventuales fuentes de financiación. En este sentido, las empresas se han convertido en una importante fuente de recursos, que por medio de la extorsión alimentan la violencia en forma directa, generando que la extorsión a las empresas se convierta en una práctica delictiva, rentable y efectiva para los actores armados ilegales y los delincuentes.

Por otro lado, es importante resaltar que la extorsión vulnera de manera directa el derecho al desarrollo de libre empresa, pero también afecta la operación y funcionamiento de las empresas, en tanto que tiene importantes repercusiones en los ámbitos de seguridad, legal y de reputación para las empresas.

En este sentido, dentro de las empresas, la falta de conocimiento y estrategias de prevención, mitigación y control, permiten que se eleven los niveles de vulnerabilidad de estas, sus empleados y contratistas. Por este motivo, es importante que las empresas cuenten con insumos que les permitan enfrentar de la mejor manera los casos de extorsión, para evitar posibles repercusiones legales y en términos de seguridad y reputación (FIP & ANDI, 2012).

Sin lugar a dudas, este importante documento de las citadas entidades es valioso por cuanto especifica detalladamente las diferentes prácticas de extorsión, sirviendo de base, por lo tanto, para entender hasta dónde ha llegado esta modalidad criminal que lesiona gravemente no solo los

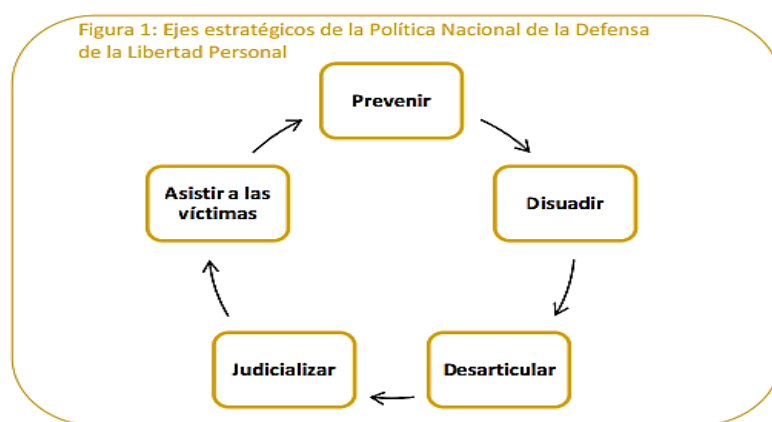
intereses de la empresa privada y a pequeños comerciantes, sino que ésta como ya se ha mencionado, extiende sus ramificaciones hasta en las mismas cárceles del país.

No obstante, el gobierno ha identificado que el fenómeno de la extorsión es un elemento que hay que atacar de inmediato, por lo cual, dentro de la política para defender el derecho a la libertad personal y atacar las fuentes de financiación de los grupos armados, se le da gran relevancia a este tema. Junto con los delitos de secuestro y extorsión, dado su impacto, se incluyeron como prioridad, en la Política Nacional de Defensa de la Libertad Personal 2011-2014, fenómenos que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos como lo son los delitos de desaparición forzada, trata de personas y las nuevas modalidades de extorsión (Ministerio de Defensa Nacional, et. al, 2011).

El objetivo central de la política es contribuir a la realización de los objetivos nacionales y a los propios del sector de seguridad y defensa, en lo concerniente a “alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la prosperidad democrática y el progreso nacional” (FIP & ANDI, 2012, p. 6), y avanzar hacia la eliminación total del secuestro y la extorsión, además de proteger a los ciudadanos de otros delitos como la trata de personas y la desaparición forzada

Los ejes estratégicos de la política consisten se encuentran a continuación:

Figura 1. Articulación de la Política de Defensa de la Libertad Personal



Esta política está articulada de la siguiente manera:



Fuente: (FIP & ANDI, 2012, p. 7).

Indudablemente, todas estas políticas y planes, tienden a eliminar la extorsión y el secuestro, pero aun así y a pesar de los esfuerzos por los organismos de seguridad del Estado, este delito sigue proliferando en el territorio nacional, como ya se ha visto anteriormente, donde no solamente entidades del Gobierno, sino entidades particulares se han pronunciado sobre ello.

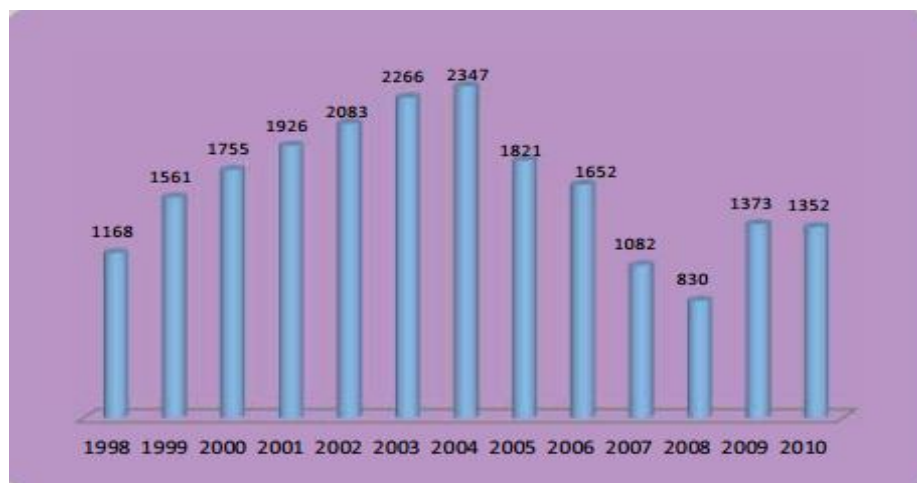
En lo que respecta a la Política Nacional de Defensa de la Libertad Personal, ya mencionado por FIP & ANDI, ahora consultado directamente se dice:

En el periodo comprendido entre 2000 y 2004, se registró un incremento de los casos de extorsión denunciados, pasando de 1.755 a 2.347 casos denunciados, lo cual coincidió con la caída acelerada de las cifras del secuestro. La cifra comenzó a caer hasta alcanzar su punto más bajo en 2008, con 830 casos denunciados. Esta disminución estuvo relacionada con el conjunto de acciones de disuasión, control y desmantelamiento que la Fuerza Pública hizo de organizaciones delincuenciales en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el DAS (hoy desarticulado), el incremento de la cooperación ciudadana y la puesta en marcha de dispositivos de control territorial.

Una de las graves falencias que existe para enfrentar eficazmente todas las modalidades de extorsión, reside en la opacidad del fenómeno, tanto por la debilidad de la denuncia como por la ausencia de indicadores que muestren en su verdadera dimensión el fenómeno. En otras palabras, las cifras citadas deben tomarse únicamente como referencia, pero son por lo pronto insuficientes para el diseño de una política pública capaz de neutralizar esta modalidad criminal (Ministerio de Defensa Nacional, et. al., 2011, p. 37).

A continuación, el Ministerio de Defensa presenta la siguiente Gráfica:

Gráfica 3. Número de denuncias de extorsión en Colombia 1998-2010



Fuente: Ministerio de Defensa Nacional (2011).

La anterior gráfica demuestra únicamente las denuncias que se han recibido sobre extorsión, pero no presenta cifras cuantitativas, en cuanto al número de personas objeto de extorsión.

A pesar de todas estas políticas, esfuerzos y el marco legal que ampara a quienes han sido víctimas de extorsión, lo cierto es que este grave delito ha incidido gravemente en la economía del país y no solamente para las grandes empresas sino que, como se ha visto abarca un sinnúmero de medianas y pequeñas empresas o personas que con grandes esfuerzos han acumulado un capital; es decir, no se queda nadie ni nada donde los delincuentes puedan sacar provechos económicos.

Existen perspectivas muy optimistas en torno al posconflicto pero, en este estado de cosas (la extorsión) de seguirse practicando sin atención alguna, hará difícil que la economía se vea favorecida, pues muchas personas o empresas se verán en la disyuntiva de salir del país o seguir pagando a los delincuentes para poder seguir usufructuando sus bienes y peor aún para salvaguardar su vida y/o la de los suyos.

Si bien es cierto que Colombia se mantuvo en un nivel estable en cuanto a su economía, a pesar de la recesión mundial, a consecuencia de la sensible baja en los precios del petróleo, bajo

nivel de exportaciones y el fenómeno de El Niño, ha conducido a que el país actualmente no presente un panorama muy halagador en cuanto a su economía, según se desprende de varias lecturas publicadas en los medios informativos; desafortunadamente éstas son esporádicas y, por el contrario, según otras consultas la economía es estable.

Si se analiza con detenimiento las publicaciones sobre el impacto en la economía en el posconflicto, se advierte que en todos los autores tanto nacional como internacionales muestran la firme convicción de que Colombia marchará sin dificultades hacia una era de paz y prosperidad. Naturalmente, esto es lo justo y deseable para toda la sociedad colombiana; pero los autores parecen ignorar deliberadamente que, en primer lugar, no prevén el futuro de posibles contingentes como actualmente está sucediendo según lo manifestado en el párrafo inmediatamente anterior. Segundo, la creciente delincuencia organizada, además de los tradicionales grupos subversivos y tercero, surgimiento de nuevas formas de criminalidad provenientes de los desmovilizados de las FARC y posiblemente del ELN, que se integren en las BACRIM o se creen nuevos grupos subversivos.

Podría pensarse que estas reflexiones son llevadas a un máximo de pesimismo; sin embargo esto no es así, se trata de que, como lo dice Lafaurie, “La paz no se construye con el deseo; la paz se construye sobre unas condiciones objetivas que hoy acusan grandes carencias en el campo, como un reflejo evidente del sesgo anti-rural de los planes de desarrollo de los diferentes gobiernos, que no es otra cosa que el sesgo en la asignación de los recursos, porque, en últimas, las cosas se hacen con plata”. (2006, p. 458).

Ahora, otro aspecto más: “La ausencia del Estado a través de sus instituciones, y la ausencia de la inversión pública que se traduce en un gran rezago en obras de infraestructura, es una condición negativa del campo, aún más grave que las anteriores, porque se constituye en causa principal de aquellas” (Lafaurie, R., J.F. 2006, p. 458).

Lafaurie agrega que:

Si gran parte de las metas para recuperar el campo están centradas en la movilización de capital humano, al Estado le corresponde generar un proceso acelerado de institucionalización y de inversión en infraestructura, que debería ser previo pero que, dadas las condiciones deberá ser paralelo. Lo importante es que sea. Detrás vendrá el capital y con él la creación de nuevas empresas de producción agropecuaria, los bancos, las aseguradoras, el transporte, las empresas que producen bienes y servicios, el comercio

mayorista y al detal, la educación privada, la recreación y el entretenimiento, etc. En fin, el desarrollo.

Es lo que deberá llegar a muchas regiones cuando el territorio sea recuperado por la Fuerza Pública. Siempre, la institucionalización primero y, luego la inversión privada. Ese es uno de los grandes retos del posconflicto, pues la paz no es sólo ausencia de violencia y seguridad bajo el respaldo de las armas, la paz es crecimiento económico, la paz es prosperidad y bienestar general (Lafaurie, R. J.F., 2006, p. 459)

A propósito de la Fuerza Pública en el posconflicto, Borda, S. (2013), señala:

Las Fuerzas Armadas de Colombia, gracias en parte a su reciente proceso de modernización y profesionalización, cuentan hoy con importantes niveles de aceptación entre la opinión pública colombiana. Gracias a este factor y a la notable asimetría militar que existe entre las fuerzas armadas y las Farc en la actual coyuntura, es difícil pensar que la resolución pacífica de la guerra en Colombia resulte en un debilitamiento o reducción de las fuerzas militares y/o de la Policía como si sucedió, por ejemplo, en El Salvador.

La experiencia del país centroamericano, de hecho, enseña que esta reducción dramática de las fuerzas de control puede redundar en el fortalecimiento de otras actividades violentas relacionadas con el crimen organizado. A pesar de que el debate sobre las transformaciones a las que se deberán someter las fuerzas armadas debería darse, según algunos, cuando la paz esté consolidada y no como resultado de la negociación misma, si es preciso adelantar reflexiones sobre un eventual cambio del papel que éstas cumplen en el escenario de un éxito del proceso de paz. El ideal es que las fuerzas armadas logren constituir como ‘fuerzas de construcción’ que contribuyan a consolidar y reforzar la presencia del Estado, especialmente donde éste ha sido tradicional e históricamente más débil.

Las Fuerzas Armadas colombianas cuentan con ciertos bienes que pueden ser de gran utilidad para el gobierno en una situación de posconflicto. Por ejemplo, los miembros de la Fuerza son profundos conocedores del campo colombiano y se pueden repensar como un puente entre un gobierno central en ocasiones ausente, y un agro con frecuencia marginalizado e ignorado por los gobiernos en Bogotá. En otras palabras y para reiterar, las

fuerzas armadas podrían jugar un papel fundamental en el intento por construir presencia estatal en lugares donde ésta ha sido débil o inexistente (Borda, 2013, pp. 2-3).

Tiene razón esta autora al decir que no es oportuno debilitar las Fuerzas Militares en el posconflicto, pues como se ha visto la modalidad de extorsión no va a cesar con la firma del tratado de paz; existen fuerzas oscuras muy interesadas en seguir operando esta modalidad para su enriquecimiento ilícito y financiación.

Aun cuando la mayor parte de las fuentes consultadas no son muy recientes, excepción la anterior, no por eso son menos convincentes en lo que se refiere a la extorsión y por lo mismo, no sobra insistir en este punto:

Esta situación, presente en numerosos conflictos del mundo a lo largo de la historia, ha alcanzado en Colombia una dimensión preocupante.

En principio, han sido las guerrillas, especialmente las FARC, las principales victimarias.

Debido al limitado apoyo financiero y militar con el que contaban, desde su surgimiento en la década del sesenta recurrieron al cobro de extorsiones a empresas, hacendados y comerciantes para financiarse. Durante los siguientes años, pese a que el narcotráfico se convirtió en una importante fuente de financiación de las guerrillas, la extorsión siguió ocupando un lugar preponderante para conseguir recursos (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2012).

Esta Universidad asegura que en un informe de la ONG holandesa *Pax Christi*, titulado “La industria del secuestro en Colombia”, relata esa difícil realidad de victimización contra las empresas. Cuenta, por ejemplo, que en el año 2000 las FARC llegaron incluso a institucionalizar la práctica de la extorsión a través de la “ley revolucionaria 002”, bajo la cual impusieron una cuota del 10% de las ganancias a todas las personas que tuvieran activos por más de un millón de dólares. En consecuencia, las FARC enviaron cartas a más de 2.000 compañías en el sur de Colombia y cobraron a cada una de ellas una cantidad mínima de US\$100.000. Algunas compañías reconocidas (como Postobón y Bavaria) se resistieron, por lo que varios comandantes de la guerrilla ordenaron obstruir la producción y la distribución de las mercancías en ciertas zonas del país, ocasionando significativos perjuicios económicos. Con el afán de conseguir más dinero, las FARC terminaron imponiendo esas “vacunas” y “boleteos” también a los sectores de medianos y bajos ingresos (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2012).

Y así, por esta línea se han publicado gran cantidad de documentos relativos a la extorsión, cuyos autores, como se ha visto a lo largo de esta investigación son personas y entidades serias y que conocen del tema, debido a sus investigaciones.

El asunto es, entonces, volviendo a la pregunta inicial: ¿De qué manera la extorsión incidirá en el desarrollo económico de Colombia en un escenario de posconflicto?

Responder con certeza a esta pregunta es difícil, puesto que el posconflicto aún no ha sido formalizado como tal, pero todo hacer prever que esto, al menos la firma del tratado de paz con las FARC está próximo, pero entrar como tal en el posconflicto para una era de paz aún es incierto.

Sin embargo, lo que no deja lugar a dudas es que si no se sigue combatiendo la extorsión a nivel empresarial, la economía del país será severamente afectada trayendo como consecuencia mayor desempleo e inseguridad.

Retomando el documento de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (2012) se dice que:

Así las cosas, es evidente que el secuestro extorsivo ha contribuido significativamente al fortalecimiento y expansión de los grupos armados en Colombia. Los delincuentes comunes, por su parte, han desempeñado un papel marginal en el negocio del secuestro extorsivo utilizándolo en algunas ocasiones para satisfacer sus intereses particulares (lucro, venganzas personales, etc.) y en otras para vender los cautivos a los grupos armados o por encargo directo de estos.

Un factor para tener en cuenta es que los extranjeros han sufrido una clara predilección dentro de todas estas modalidades de violencia. Distintos factores explican este fenómeno: en primer lugar, suelen contar con mayores recursos financieros y de infraestructura e invertir en negocios altamente rentables, volviendo el chantaje mucho más provechoso; en segundo lugar, se ven más fácilmente forzados a ceder ante las demandas de los violentos porque se sienten responsables del bienestar de sus empleados y porque deben garantizar el funcionamiento normal de sus empresas para proteger las inversiones; y en tercer lugar, porque el impacto político del plagio puede ser mayor, en tanto aumenta la presión sobre el gobierno por parte de los gobiernos extranjeros y la opinión pública.

Estas formas de violencia tienen importantes consecuencias. Además de los daños físicos y psicológicos, genera graves perjuicios patrimoniales, pues el pago de las extorsiones y los rescates muchas veces han llevado a la quiebra de las empresas y a contraer cuantiosas deudas que evitan la recuperación económica de las víctimas. Estos problemas no solo afectan al gremio de los

empresarios y comerciantes y a su entorno directo, sino también al conjunto de la sociedad (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2012).

Se decía anteriormente que el delito de la extorsión se ha extendido a todo el territorio nacional, aseveración que se ve confirmada por una publicación por Internet, de contexto Ganadero (2014, 3 de octubre), titulada “Informe Especial: Panorama de la extorsión en Colombia” donde presenta testimonios de personas que son objeto de extorsión en los departamentos de Cesar, Sucre, la Orinoquía, Caquetá, Putumayo, entre otros.

Presenta, además, la figura que sintetiza y demuestra quienes son las bandas que practican esta modalidad:

Pese a lo anterior, sería injusto no destacar en este escrito que el Gobierno Nacional no ha hecho nada para evitar este tipo de criminalidad, a pesar de que existen las siguientes Leyes expedidas por el Congreso de la República tendientes a darles herramientas legales a las autoridades para poder combatir ese tipo de delitos:

- Colombia, Congreso de la República, 2002, Ley 733. Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones.
- Además de pronunciamientos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Todos encaminados a combatir la extorsión con el propósito de que esta aberrante y criminal práctica sea erradicada totalmente del territorio colombiano.
- Colombia, Congreso de la República, 2000, Ley 599. Por la cual se expide el Código Penal.
- Colombia, Corte Constitucional (2001) *Sentencia C-646*. Según la cual, la Ley 599 fue declarada exequible dados los cargos en ella analizados. De acuerdo con Botero, “el Fiscal General de la Nación es competente para presentar proyectos de Código Penal y de Procedimiento Penal puesto que ambos son elementos del diseño de la política criminal del Estado. Además, el Código de Procedimiento Penal no debe ser tramitado como una ley estatutaria sino como una ley ordinaria” (Botero, s.f., p. 1).

Si esto se logra, como lo asegura el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (en adelante CERAC):

Colombia tendría unos beneficios económicos entendidos como las ganancias generadas sobre el bienestar para la sociedad, estos pueden ser vistos como:

- Remoción de obstáculos que impiden el desarrollo económico y social.
- Reducción o desaparición de un costo que impide el desarrollo económico.
- Generación de ganancias pecuniarias, tangibles e intangibles relacionadas con la paz.
- Aparición de nuevas oportunidades para el desarrollo.

Los beneficios económicos se verían limitados si no se consigue:

- Incrementar la seguridad ciudadana.
- Reducir la violencia relacionada al conflicto armado interno de forma sustancial.
- Garantizar un último y definitivo proceso de desarme, desmovilización y reinserción (DDR), que desactive a los grupos armados violentos del conflicto.
- Evitar que surjan nuevos grupos armados violentos.
- Disminuir la violencia del crimen organizado.
- Aminorar la cantidad de armas en la sociedad.
- Mantener la credibilidad en la estructura del proceso de paz.
- Generar políticas públicas que frenen el proceso de transformación de la violencia.

Pero también agrega:

No se ha logrado ni una seguridad permanente ni una paz sostenida.

- En los últimos doce años, en todas las regiones del país, no se ha logrado una paz perdurable.

- El conflicto ha finalizado solo en zonas cercanas a los núcleos urbanos y en la región Andina.

- La paz, camino seguro al desarrollo.

- Convergencia: Si bien toda la economía se beneficiará con el fin del conflicto, se potenciará el desarrollo en aquellas zonas pobres, alejadas y con menor tamaño poblacional, las más afectadas por el conflicto.

- En tanto persiste el conflicto persiste el atraso en materia de desarrollo.

- No basta con interrumpir el conflicto armado para desarrollar una región, hay que terminarlo (CERAC-, 2014, p. 4).

Habrá mayores demandas en seguridad y se reestructurará el gasto militar:

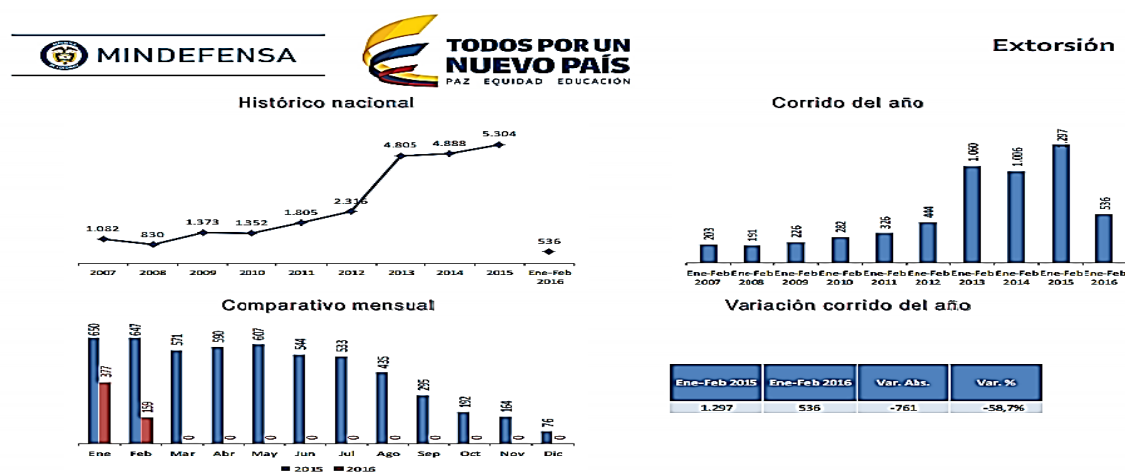
La trayectoria del gasto militar como porcentaje del PIB no cambia inmediatamente finaliza el conflicto. Al observar la trayectoria del gasto militar de varios países que han tenido conflicto armado, se evidencia un aumento inmediatamente después del punto de quiebre. Al finalizar el conflicto se debe contener la generación de nuevos grupos violentos armados, por lo tanto no es posible disminuir el gasto militar inmediatamente. La misma reestructuración implica muchas veces un aumento temporal de recursos.

Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional en febrero del presente año presentó ante la opinión pública los logros alcanzados en las diferentes modalidades de crimen, dentro de las cuales se encuentra la extorsión.

Como se observa en la Gráfica 3, es tal la magnitud de este grave problema que si bien es cierto que los logros alcanzados contra este delito, entre muchos otros, ha sido significativo, se sigue cometiendo, tanto por los grupos subversivos y los grupos al margen de la ley como se observa en la gráfica presentada por la publicación de Contexto Ganadero (2014).

El Ministerio de Defensa Nacional (2016), en su informe anual, presenta el siguiente gráfico, que da cuenta de los logros alcanzados durante el año 2015 y lo corrido hasta febrero del presente año:

Gráfica 4. Histórico del secuestro de 2007 a febrero de 2016.



*Cifras preliminares sujetas a variación.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, 2016, p. 29.

Teniendo en cuenta esta gráfica, a continuación se hace una comparación para demostrar que ninguna cifra se puede dar por cierta, ya que en muchos casos las personas se abstienen de denunciar una extorsión por temor a represalias.

Es así como a continuación se presenta una tabla comparativa:

Tabla 3. Comparación de cifras sobre extorsión: 2007-2016

Entidad	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grupo Atlas Seguridad	1.082	830	1.371	1.652	1085	2.316	4.085	4.888		
Fundación Seguridad y Democracia ²	265	256	117							
Ministerio de Defensa Nacional 2011	1.082	830	1.373	1.352						
Ministerio de Defensa Nacional 2016 (febrero)	1.082	830	1.373	1.352	1.805	2.316	4.085	4.888	5.304	536

Fuente: Elaboración propia

Es indudable que el Grupo Atlas Seguridad se basó en los datos del Ministerio de Defensa, aun cuando con ligera diferencia en los años 2009 y 2010. Por lo tanto, los datos del Ministerio son los más confiables.

Conclusión

Este breve recorrido por Colombia marcada en su mayor parte por el delito de extorsión practicado por los cinco grandes grupos que lo practican, dejan muy en claro que no obstante las leyes que existen y los esfuerzos de la Fuerza Pública para combatirlo, este sigue practicándose para el fortalecimiento de dichos grupos y su enriquecimiento basado en el infame pues no

² Esta entidad anuncia que sus datos corresponden a poblaciones mayores de 200.000; sin embargo, únicamente lo hacen sobre 100.000 y, además, presentan datos trimestrales correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006. Pero se aclara que estos datos corresponden únicamente a 6 de las ciudades más grandes de Colombia.

solamente empobrece a quien o quienes son afectados, sino que incide por lógica, en la economía del país que en los actuales momentos no son precisamente, los más optimistas.

El documento ha demostrado como los grupos al margen de la ley llámense FARC, ELN, AUC, BACRIM, no han ahorrado esfuerzo alguno para practicar una de las formas más infames con que se atenta contra la economía de las empresas y otros comerciantes: La extorsión.

Se ha visto como esta modalidad de delito es practicada aun en las cárceles del país; no hay región o sector donde no se haya cometido la extorsión.

Si se habla de la empresa en el posconflicto, la extorsión es el punto de inflexión que puede malograr todos los intentos porque el país camine con seguridad hacia un desarrollo económico que posibilite la seguridad de sus habitantes, generando por consiguiente bienestar para toda la sociedad. Una economía libre de este flagelo puede proporcionar a la sociedad colombiana elementos que contribuyan a la generación de nuevas empresas, a la inversión extranjera, lo que traería como beneficio un mayor nivel de vida para todos los ciudadanos.

Cierto que es el Estado a través de sus Fuerzas, quien debe proteger a los habitantes del país, a la empresa que beneficia su economía, pero mientras subsista este estado de cosas (extorsión y chantaje), el posconflicto se verá atravesado por estas formas delictivas.

Referencias bibliográficas

- Borda, S. (2013). Escenarios posibles frente al proceso de paz colombiano. *Efectos internos y regionales*. Quito: Recuperado de: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/10153.pdf>
- Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). (2014). Qué ganará Colombia con la paz? Resumen Ejecutivo. Recuperado el 15 de abril de 2016, de: <http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-ganapaz-2014.pdf>
- Contexto Ganadero. (2014, octubre 3). Informe Especial: Panorama de la extorsión en Colombia. Recuperado de: www.contextoganadero.com/.../informe-especial-panorama-de-la-extorsion-en-colom
- Echandía (2006). Soborno y Extorsión: Obstáculos para la Construcción de Paz y la Superación del Conflicto en Colombia. En Fundación Ideas para la Paz (FIP) & Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). *Extorsión y Empresas en Colombia*. Guía práctica

para enfrentar el delito de la extorsión desde la empresa privada. Recuperado de:

<http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f2662736952.pdf>

Fundación Ideas para la Paz (FIP) & Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

(2012). Extorsión y Empresas en Colombia. *Guía práctica para enfrentar el delito de la extorsión desde la empresa privada*. Recuperado de:

<http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f2662736952.pdf>

Fundación Seguridad y Democracia (s.f.). La seguridad en las principales ciudades de

Colombia. En *Revista Coyuntura de Seguridad*. Bogotá. Recuperado de:

http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_1533.pdf?view=1

González R., H., (2015, oct. 14). Crisis económica 2015 – 2016. Recuperado de:

<http://www.elespectador.com/opinion/crisis-economica-2015-2016>

Grupo Atlas, et. al. (2015). *Apreciación de Seguridad Nacional, Indicadores de Secuestro,*

Terrorismo, Extorsión y Evolución del Orden Público. Recuperado de:

<https://www.atlas.com.co/.../INFORME%20SEGURIDAD%20NACIONAL%20SIA%2...>

Lafaurie R., J.F., (2006). *Posconflicto y Desarrollo. Inversiones sustitutivas de impuestos: una propuesta de inclusión y desarrollo rural*. ISBN: 978-958-9285-71-8. Bogotá: Fundación Korand Adenauer.

Llano, C. e Ibarra, R. (2011). “La Extorsión: un secreto a voces”. Extorsión Horizonte y

Complejidad. Fundación País Libre. En: Fundación Ideas para la Paz (FIP) & Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). *Extorsión y Empresas en Colombia*. Guía práctica para enfrentar el delito de la extorsión desde la empresa privada. Recuperado de:

<http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f2662736952.pdf>

Ministerio de Defensa Nacional, et. al. (2011-2014), *Política Nacional de Defensa de la*

Libertad Personal. Bogotá: Recuperado el 17 de mayo de 2016, de:

<https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica-libpersonal.pdf>.

Ministerio de Defensa Nacional. (2016). Logros de la política de defensa y seguridad todos por un nuevo país. Recuperado de:

https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf

Naciones Unidas y Departamento Nacional de Planeación (2003). *Informe Nacional de Desarrollo Humano –Colombia –*. ISBN. 958-97196-7-8. Bogotá: Ed, Panamericana Formas e Impresos, S.A.

La pescadora, extorsión desde la cárcel a “nombre de los Urabeños”. (2015, mayo 27). Periódico *El Colombiano*. Recuperado el 15 de mayo de 2016, de: www.elcolombiano.com/.../desde-la-carcel-hacen-llamadas-de-extorsion-a-nombre-de-

Las 7 clases de extorsión que usted debe conocer. (2015, mayo 17). Periódico *El Heraldo*. Recuperado el 15 de mayo de 2016, de: <http://www.elheraldo.co/judicial/las-7-clases-de-extorsion-que-usted-debe-conocer-195714>

Aprenda cómo evitar ser víctima de los extorsionistas en Cali. (2015, enero 22). Periódico *El País*. Recuperado el 15 de mayo de 2016, de: <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/denunciar-mejor-antidoto-contra-extorsion>

Personal 2011-2014 (Citado en FIP y ANDI). Recuperado de: <https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica-libpersonal.pdf>

Justicia. (2015, abril 14). *Durante el 2014 se registraron 13 denuncias diarias por extorsiones*. Informe de la Universidad Jorge Arboleda. Bogotá. Periódico *El Tiempo*. Recuperado el 15 de mayo de 2016, de: <http://www.eltiempo.com/politica/justicia/extorsiones-en-colombia-informe-de-la-u-sergio-arboleda/15570995>

Observatorio de Construcción de Paz (2012). Para empezar. ¿Por qué empresas y construcción de paz? En: *Cuadernos a la Carta*. N° 3. Bogotá, Colombia: Universidad Jorge Tadeo Lozano: Recuperado de: http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/cuaderno3.pdf